

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD

Bogotá D.C, seis (6) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: **Acción de tutela**

Radicación: **2023-00323**

I. ASUNTO:

Dentro de la oportunidad prevista en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, procede el Juzgado a resolver la acción de tutela instaurada por **OLIVO BERDUGO CHACÓN** en contra de **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS - PROTECCION S.A.** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIA DE PENSIONES - COLPENSIONES**.

II. ANTECEDENTES:

El accionante sustenta sus pretensiones en los hechos que se resumen a continuación:

2.1. HECHOS (SÍNTESIS):

“1. Fui empleado de muchas empresas como consta en mi certificado que apporto para probar la verdad; pero desde cumplí mi edad inicie con la solicitud de retiro pero me demoraron con el supuesto hecho que protección realizaba la solicitud de traslado de aportes a protección el mes de octubre del año 2022 hable con una asesora que me atendió demasiado mal y me dijo que debía firmar lo que la entidad exigía para dicho retiro, yo le dije no es justo que me diera esa información tan descortés y que no firmaba nada.

2. El día 28 de marzo del 2023 volví a ir pero la verdad el personal no es humano para explicar por qué motivo me sale solo \$ 1.141.660 si yo labore y coticé muchos años en el seguro social y luego en protección para que ahora sea un ahorro tan bajo

3. Es importante expresar que yo radique directamente los documentos que certifican que tengo por parte de seguro social semanas aportadas, pero todo fue inútil y solo perdí plata y tiempo; en el mes de mayo del 2023 me llamaron para abriera una cuenta y de esta forma recibir lo que ellos me dicen sin poder exigir mis derechos.

4. Adjunto copias de los documentos que tengo en mi poder del seguro social 09/2006, y de protección del 15/01/2020, donde se evidencia que desde ese entonces existen errores de las semanas cotizadas deberían haber 900 semanas y no 62.71 como aparece en la historia laboral de protección, más 738.63 semanas cotizadas en el seguro social, que tampoco se ven reflejados en la actual historia laboral según reporte del 15/05/2023, según este reporte ofrecen en dinero \$1.141.660, que constitucionalmente es imposible de aceptar.

5. Por tal motivo solicito a su señoría de manera muy respetuosa emitir la solicitud a las entidades correspondientes para la revisión y corrección de las semanas cotizadas con el fin para tener el derecho una pensión digna como es mi derecho.

2.2. PETICIÓN:

PRIMERA: TUTELAR el derecho fundamental de gozar de una vejes digna y reconsiderar el desembolso de la totalidad de mi retiro conforme lo señala la ley colombiana.

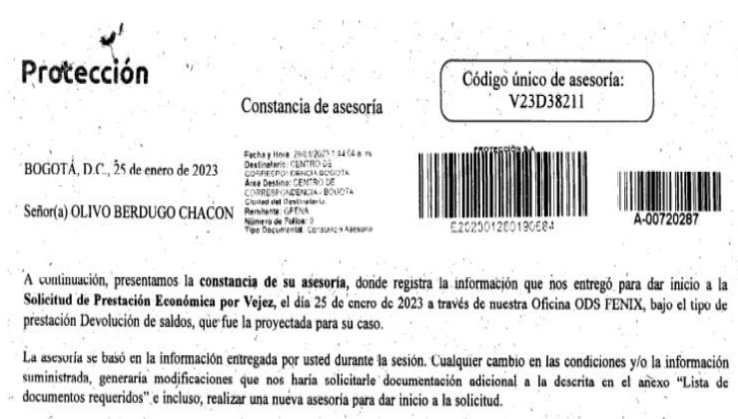
III. ACTUACIÓN PROCESAL:

La acción fue admitida por este estrado judicial el 24 de mayo de 2023, ordenándose realizar las respectivas notificaciones y solicitando contestar el libelo dentro del término de dos (2) días.

3.1. RESPUESTA:

PROTECCIÓN (archivo digital No. 010). Solicitaron se niegue la tutela bajo el argumento que:

se informa que el señor Olivo Berdugo Chacon efectivamente se acercó a las oficinas de Protección S.A. el 25 de enero de 2023, fecha en la que se realizó asesoría para dar inicio a la solicitud de prestación económica por vejez, tal y como se observa en la siguiente imagen:



Con el fin de resolver la mencionada solicitud y luego de haberse surtido en el caso las etapas necesarias para la radicación de la misma, eso es, asesoría inicial, entrega de documentación, reconstrucción de historia laboral, normalización de cuenta de ahorro, gestión de bono pensional o aportes, y notificación de inicio del trámite (6 de febrero de 2023), (Todo esto informado como un debido proceso desde la asesoría), se inició en el caso un análisis detallado de la historia laboral del señor Olivo Berdugo Chacon, tendiente a establecer si se acreditaban los requisitos establecidos en el Artículo 64 de la Ley 100 de 1993

Así las cosas, y después de realizadas las validaciones de requisitos legales, mediante comunicación de fecha del 14 de febrero de 2023 fue resuelta de fondo la prestación económica reclamada, reconociéndose el derecho a la devolución de saldos.

Es importante poner en conocimiento del despacho, que el derecho que le asiste al señor Olivo Berdugo Chacón, es la devolución de saldos, gracias a que no cuenta con el capital suficiente para financiar su pensión mensual de vejez superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente al año 1993, actualizado año a año conforme al índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. Como tampoco cuenta con las 1150 semanas que se exigen como mínimo para solicitar el reconocimiento de la garantía de pensión mínima ante La Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público OBP.

Es importante resaltar que, revisados los antecedentes documentales de esta Administradora, no se evidencia que el señor Olivo Berdugo Chacón haya presentado una solicitud de reconsideración sobre la prestación pensional reconocida, por lo tanto, nos percatamos de la inconformidad del afiliado por medio de la presente acción de tutela, por lo que es necesario que dicha situación se escale a esta Administradora con detalle, para proceder si es el caso con un nuevo análisis, sin embargo, debe mencionarse que la situación pensional del señor Olivo Berdugo Chacón se definió de acuerdo a la historia laboral que fue validada y aprobada por el mismo.

Ahora bien, las inconsistencias en la historia laboral, mencionadas por el accionante en la presente acción de tutela, corresponden a los periodos en vigencia de afiliación a Colpensiones, respecto de las cuales, dicha entidad manifiesta no tener antecedentes de pagos realizados por los empleadores del accionante.

Por lo tanto, Protección S.A. esta imposibilitada a realizar modificaciones de historia laboral hasta que esto no se resuelva con Colpensiones, por lo que se solicita requerir a dicha entidad para que resuelva las inconsistencias que a la fecha esta presentado la historia laboral del afiliado, pues se reitera que las Administradoras de Fondos de Pensiones, no son competentes para cambiar, modificar, disminuir, aumentar o ingresar la historia laboral de tiempos cotizados al ISS hoy Colpensiones, gracias a que la única entidad que puede hacerlo es Colpensiones, a través del archivo laboral masivo.

También es importante resaltar que, en la Oficina de Bonos Pensiones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se encontró que los periodos en los que el accionante estuvo afiliado como trabajador dependiente del empleador Luis Herna Martínez Morales estuvieron en mora, por lo que esos periodos no son validos y no se tienen en cuenta en la historia laboral.

Debe restarse nuevamente que estos periodos de mora también corresponden a los periodos en vigencia de afiliación a Colpensiones, por lo que se reitera que mi representada esta imposibilitada para realizar modificaciones de historia laboral, pues como se dijo anteriormente las Administradoras de Fondos de Pensiones, no son competentes para cambiar, modificar, disminuir, aumentar o ingresar la historia laboral de tiempos cotizados al ISS hoy Colpensiones, gracias a que la única entidad que puede hacerlo es Colpensiones, a través del archivo laboral masivo.

Por todo lo dicho anteriormente, es que esta Administradora después de haber realizado un análisis detallado del caso del señor Olivo Berdugo Chacón, procedió a definir y resolver de fondo la solicitud de pensión elevada por el accionante a esta Administradora, reconociéndole el derecho a la devolución de saldos.

COLPENSIONES (archivo digital 012): Solicitaron se niegue la acción de tutela, argumentando que:

(...)

En virtud de lo expuesto, para poder gestionar el ingreso de documentos, revisión y decisión de cada solicitud presentada en Colpensiones de forma correcta, las radicaciones se efectúan para cada ciudadano por separado, asignando un trámite independiente a cada persona, donde quedan asociados los documentos que exclusivamente a ella le pertenecen y que son necesarios para decidir su solicitud; sin embargo, verificados los sistemas de información que tiene Colpensiones, se puede observar que NO se encuentra petición presentada por el accionante ante esta entidad que se encuentre pendiente de respuesta, hecho que se confirma con el traslado de tutela y anexos donde se evidencia que el accionante no aporta siquiera prueba sumaria en la que se evidencie que en ejercicio de la petición hubiese puesto en marcha la administración, de lo que se

entiende un uso indebido de la acción constitucional por cuanto alega la vulneración a derechos fundamentales y esta entidad tiene conocimiento solo a partir de la notificación de la acción, además, se resalta que el derecho de petición es un presupuesto que debe agotarse para intentar la protección de los derechos fundamentales a través de este mecanismo constitucional.

Conforme a lo anterior, para efectos de estudiar el derecho pretendido por la parte accionante, es necesario que aporte a la entidad la totalidad de documentos que soporten su petición, toda vez que Colpensiones solicita el allego de dichos documentos no como un capricho, contrario a ello, se requiere con el fin de dar celeridad a las actuaciones administrativas y resolverlas como en derecho corresponda.

Debe tenerse en cuenta que respecto a los trámites misionales administrados por Colpensiones relacionados con prestaciones económicas, novedades de nómina de pensionados, recuperación de semanas, cálculos actuariales, medicina laboral entre otros, deberán ser radicados en los puntos de atención al ciudadano PAC de acuerdo a los horarios estipulados por la Entidad dentro del marco de la emergencia sanitaria; teniendo en cuenta que estas solicitudes requieren de unas validaciones tendientes a evitar alguna suplantación o cualquier riesgo que afecte el reconocimiento de un derecho económico.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la prestación de "reconsiderar el desembolso de la totalidad de mi retiro conforme lo señala la ley colombiana", revisadas las bases de datos de esta administradora, se logró evidenciar que la parte actora NO cuenta con afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, razón por la cual, es la AFP PROTECCION, la competente para suministrarle la información relacionada con el trámite mencionado, así como sobre cualquier otra gestión o trámite que se realice.

IV. CONSIDERACIONES:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo expedito para garantizar la protección de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o, en específicos casos, de los particulares. Permite el acercamiento real del Estado a las personas, por cuanto éstas tienen la posibilidad de acudir a él sin mayores requerimientos formales, a fin de que, a falta de otros medios de defensa judicial, se le garantice la efectividad de un derecho o se impida su violación si solo se encuentra amenazado.

Sin embargo, el acceso a este procedimiento preferente y sumario, es procedente siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial que sea idóneo, apreciado en concreto, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por lo mismo, no es alternativo sino residual.

De tal medio de defensa ciudadana se habla en el artículo 86 de la Carta Política que dispone: "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública".

Según lo previsto en el numeral 2º del Decreto 306 de 1992 (reglamentario del Decreto 2591 de 1991), dicha acción protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, por ende, no puede emplearse, para hacer

respetar derechos que sólo tengan rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.

DEL CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA Y SUS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD.

El respeto a los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, como exigencias generales de procedencia de la acción de tutela, ha sido tradicionalmente una condición necesaria para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales, por vía excepcional. De hecho, de manera reiterada, la H. Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela conforme al artículo 86 de la Carta, es un mecanismo de protección de carácter residual y subsidiario, que puede ser utilizado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, cuando no exista otro medio idóneo para la protección de los derechos invocados, o cuando existiendo otros medios de defensa judiciales, se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.¹

Así, el agotamiento efectivo de los recursos y mecanismos ordinarios de defensa judicial, resulta ser no sólo un requerimiento de diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales, sino un requisito necesario para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de defensa, salvo que por razones extraordinarias no imputables a quien alega la vulneración, la persona se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa, circunstancia que deberá ser debidamente acreditada en cada caso concreto.

Como puede verse, la acción de tutela no se constituye como una instancia adicional en los procesos judiciales contemplados por el ordenamiento jurídico para la definición y resolución de los conflictos legales, siempre y cuando los medios de defensa previstos en su interior, mantengan el nivel de eficacia necesario para proteger los derechos fundamentales de las partes en litigio.

Ahora bien, en el sub lite la pretensión de amparo se dirige contra COLPENSIONES en calidad de entidad pública puede ser sujeto pasivo en la acción de tutela.

En el caso que se estudia, el reproche que por vía de tutela se le hace a PROTECCIÓN y COLPENSIONES, consiste en la inconformidad del accionante respecto a la devolución de los aportes que le fuera reconocido por PROTECCIÓN, manifestando que dicha devolución no corresponde a la realidad de todo lo que cotizó.

CASO CONCRETO

Descendiendo al caso de estudio, se procede a estudiar la presunta vulneración al derecho a la seguridad social, salud, igualdad invocados por el accionante de la siguiente manera:

En primer lugar, se observa que, conforme a lo narrado por el accionante, solicitó la devolución de sus aportes ante PROTECCIÓN, entidad que, de acuerdo a los requerimientos que le hizo al señor OLIVO, le dio trámite y le reconoció dicha prestación, tal y como se lo comunicó el 6 de febrero de 2023 como pasa a verse:

¹ Sobre la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, resultan relevantes las sentencias C-1225 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SU-1070 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; SU-544 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-1670 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz, y la T-225 de 1993 en la cual se sentaron la primeras directrices sobre la materia, que han sido desarrolladas por la jurisprudencia posterior. También puede consultarse la sentencia T-698 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y la sentencia T-827 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

BOGOTÁ, D.C., 06 de febrero de 2023

Señor(a) OLIVO BERDUGO CHACON
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ, D.C.

Asunto: Recepción radicación solicitud de prestación económica de Vejez del afiliado CC 79231158 - OLIVO BERDUGO CHACON

Respetado(a) Señor(a):

Reciba un cordial saludo por parte de Protección S.A.

Luego de revisar la documentación entregada se evidencia que esta se encuentra bajo las condiciones solicitadas, por tanto, damos inicio a su solicitud de prestación económica por Vejez bajo el tipo de prestación proyectada como Devolución de saldos A partir del día 06 de febrero de 2023 comenzamos con las gestiones necesarias para definir la prestación a la que usted tendría derecho, teniendo en cuenta la información relacionada y documentación entregada.

Datos personales

Tipo identificación	CC		Identificación	79231158	
Nombres y Apellidos	OLIVO BERDUGO CHACON				
Estado Civil	CASADO		Fecha de nacimiento	28/02/1960	
Género	MASCULINO	Fecha expedición identificación		01/08/1978	
Correo Electrónico	nancy.medina1962@gmail.com				
Dirección	CL 131 B 151 A - 70 BRR SUBA LISBOA				
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.		Departamento	BOGOTÁ, D.C.	
País	COLOMBIA		Teléfono		
Celular	3108838680		Otro número	3102491949	
Autorizaciones de envío de información		Correo electrónico	SI	Celular	SI
Medio de contacto de preferencia		CELULAR			

Datos del apoderado

Tipo apoderado	
Tipo identificación	Identificación

En segundo lugar, debe decirse que, dicha decisión fue comunicada al aquí accionante tal y como lo reconoce en el escrito de tutela, sin embargo, ante su inconformidad por el valor reconocido por la devolución de aportes, el señor OLIVO BERDUGO CHACHÓN, no ha presentado ante la entidad actualmente encargada, esto es, PROTECCIÓN, ni ante COLPENSIONES donde en alguna oportunidad estuvo afiliado, la reclamación correspondiente para procurar una revisión a la decisión adoptada y si es del caso la corrección que corresponda.

Respecto a que el accionante cuenta con otros medios administrativos y judiciales para hacer valer sus derechos, ha dicho el máximo tribunal constitucional ha establecido el alcance de la subsidiaridad en las acciones de tutela, como se pronunció en la sentencia T -480-2011, en donde enseñó lo siguiente:

"La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que, en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, **los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y administrativas- y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional.** En efecto, el carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Tal imperativo constitucional pone de relieve que para acudir a la acción de tutela el peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios, **pero también que la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia del mecanismo de amparo establecido en el artículo 86 superior.** Sobre este particular, ha precisado la jurisprudencia que si existiendo el medio judicial de defensa, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que éste caduque, no podrá posteriormente acudir a la acción de tutela en procura de obtener la protección de un derecho fundamental. En estas circunstancias, la acción de amparo constitucional no podría hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protección, pues tal modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo trámite se resuelva definitivamente acerca de la vulneración iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo." NEGRILLA Y SUBRAYADO FUERA DEL TEXTO.

De lo anterior se observa que las inconformidades presentadas por el accionante van encaminadas a que el juez constitucional ordene la revisión y corrección de sus semanas cotizadas y de esta manera se ajuste la devolución de sus aportes, sin embargo, es claro que tal petición, trasciende la órbita de Competencia del Juez Constitucional, dado que dicho trámite está sujeto a un procedimiento que no puede ser omitido a través de una acción constitucional la cual es de carácter preferente y de naturaleza excepcional.

Nótese que no se acreditó que el accionante haya acudido a las vías administrativas o judiciales, con el fin de que se procediera a subsanar las irregularidades presentadas.

Por lo anterior es claro que NO nos encontramos ante vulneración de Derecho Constitucional alguno, en razón a que la acción constitucional no es el mecanismo idóneo para controvertir trámites establecidos por PROTECCIÓN y COLPENSIONES, para que proceda la revisión y corrección de semanas cotizadas por este medio, máxime si se cuenta con otros mecanismos al interior del trámite administrativo, además obsérvese que al accionante no se le ha negado tal derecho, sino que debe presentar dicha solicitud ante PROTECCIÓN y COLPENSIONES, situación que no quedó acreditada en esta vía constitucional.

Por lo anterior, a juicio de este despacho la solicitud de amparo constitucional es improcedente, puesto que el accionante tiene otros mecanismos administrativos y judiciales de defensa y no se ha acreditado ni siquiera sumariamente la existencia de un perjuicio irremediable además de no encontrarse vulneración de derecho alguno.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir las decisiones que se encuentran en curso, y menos los tramites que se adelantan al interior de un proceso, se NEGARÁ la acción de tutela promovida por el accionante

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTÁ, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional elevada por **OLIVO BERDUGO CHACÓN**, conforme se explicó en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNGO: ORDENAR que por Secretaría se notifique esta sentencia a las partes en la forma más expedita y eficaz.

TERCERO: REMITIR las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada la sentencia dentro del término legal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature appears to be 'CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ'.

CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ

JUEZ

AP.